

VOTO PARTICULAR QUE FORMULA EL MINISTRO JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ CON RELACIÓN A LA CONTRADICCIÓN DE TESIS 63/2019.

I. Antecedentes.

1. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió por mayoría de tres votos¹ la contradicción de tesis citada al rubro, en sesión de uno de septiembre de dos mil veintiuno. Se determinó declarar existente la contradicción de tesis, debiendo prevalecer el criterio sostenido por esta Primera Sala.

II. Razones de la sentencia.

2. En la sentencia de la mayoría, se determinó que la contradicción de tesis era existente, al estimar que los Tribunales Colegiados contendientes sostuvieron distintas posturas respecto al interés jurídico del imputado para promover juicio de amparo indirecto en contra de la determinación judicial que revoca el acuerdo de no ejercicio de la acción penal y archivo definitivo de la investigación y ordena la reapertura de la investigación seguida en su contra.
3. En efecto, el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito determinó que el juicio de amparo indirecto es procedente en contra de la resolución del juez que revoca la determinación de no ejercicio de la acción penal y ordena la reapertura de la investigación. Ello, al estimar que en ese supuesto no se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107,

¹ De los señores Ministros Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena (Ponente) y la señora Ministra Presidenta Ana Margarita Ríos Farjat. En contra de los emitidos por la señora Ministra Norma Lucía Piña Hernández y de quien suscribe este voto.

fracción V, ambos de la Ley de Amparo², porque dicha determinación judicial sí afecta la esfera jurídica del quejoso, ya que la no acción penal generó un estado jurídico en su favor al dejar de tener la calidad de indiciado.

4. Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito determinó que el juicio de amparo indirecto no es procedente en contra de la resolución del juez que revoca la determinación de no ejercicio de la acción penal y ordena la reapertura de la investigación. Esto, porque se actualiza la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XII de la Ley de Amparo³, pues esta determinación no afecta los intereses jurídicos o legítimos de la parte quejosa.
5. Así, se dijo que la pregunta que debía formularse era: **¿El imputado cuenta con interés jurídico para promover el amparo indirecto en contra de la resolución del juez de control que revoca la determinación ministerial de no ejercicio de la acción penal y ordena la continuación de la investigación?**
6. Esta Primera Sala concluyó que el imputado cuenta con interés jurídico para promover el juicio de amparo, ya que la reapertura de la

² **Artículo 61.** El juicio de amparo es improcedente:

[...]

XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.

Artículo 107. El amparo indirecto procede:

[...]

V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;

³ **Artículo 61.** El juicio de amparo es improcedente:

[...]

XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;

investigación con la finalidad de posibilitar el ejercicio de la acción penal constituye un acto de molestia que es susceptible de generar afectaciones a la seguridad jurídica, vida privada, e inclusive, potencialmente, la libertad del indiciado.

7. Al respecto, se consideró que la determinación de no ejercicio de la acción penal emitida por el Ministerio Público crea un estado de cosas en su favor al dejar de tener la calidad procesal de indiciado, para no ser más objeto de investigación y persecución penal. En ese sentido, ordenar que continúe la investigación seguida en su contra repercute inevitablemente en su esfera jurídica, pues este regresaría a la categoría procesal de indiciado, dejándolo en estado de inseguridad jurídica respecto a su situación procesal.
8. A mayor abundamiento, se indicó que el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales,⁴ expresamente niega la posibilidad de recurrir la resolución dictada por el Juez de control que resuelva la impugnación promovida en contra de la determinación de no ejercicio de la acción penal, por tanto, ello no podría implicar que tales actos se encuentran exentos de revisión constitucional. Por el contrario, en aras de resguardar el derecho de acceso a la justicia y el derecho a un recurso eficaz, desarrollados ampliamente por esta Corte y la doctrina interamericana, se justifica especialmente la procedencia de la revisión constitucional de las actuaciones del Juez de control, vía amparo indirecto.

⁴ **Artículo 258. Notificaciones y control judicial**

Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación.

La resolución que el Juez de control dicte en estos casos no admitirá recurso alguno.

9. Asimismo, se recordó que esta Primera Sala, al resolver la contradicción de tesis 89/2020,⁵ sostuvo que no se actualiza una causa manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo indirecto para desechar de plano la demanda cuando se impugna el auto que revoca la determinación ministerial de no ejercicio de la acción penal y ordena la continuación de la investigación, sin que ello prejuzgue sobre una eventual causa de improcedencia que pueda advertirse o actualizarse en la sustanciación del juicio de amparo⁶.
10. Por lo anterior, se estimó que debía prevalecer la jurisprudencia de rubro: **“INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LO TIENE EL IMPUTADO PARA PROMOVERLO EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN DEL JUEZ DE CONTROL QUE REVOCA LA DETERMINACIÓN MINISTERIAL DE NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL Y ORDENA LA CONTINUACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN (SISTEMA PENAL ACUSATORIO).”**

III. Razones del disenso.

11. Voté en contra de la decisión de la mayoría porque, en mi opinión, contra el auto que revoca el no ejercicio de la acción penal y ordena la

⁵ Resuelta en sesión de diez de febrero de dos mil veintiuno, por mayoría de tres votos de los señores Ministros Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien se reservó su derecho a formular voto concurrente, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena (Ponente) y la señora Ministra Presidenta Ana Margarita Ríos Farjat. En contra de los emitidos por la señora Ministra Norma Lucía Piña Hernández y el señor Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, quienes se reservaron su derecho a emitir voto particular.

⁶ Lo anterior se refleja en la jurisprudencia 1a./J. 9/2021, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 2, Junio de 2021, Tomo IV, página 3467, registro 2023205, de rubro: **“IMPROCEDENCIA EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. NO SE ACTUALIZA UNA CAUSA INDUDABLE Y MANIFIESTA PARA DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA CUANDO SE RECLAMA LA RESOLUCIÓN DEL JUEZ DE CONTROL QUE REVOCA LA DETERMINACIÓN MINISTERIAL DE NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL Y ORDENA CONTINUAR CON LA INVESTIGACIÓN.”**

reapertura de una investigación, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII,⁷ en relación con el artículo 5º, fracción I,⁸ ambos de la ley de amparo.

12. Dicha opinión también la expresé en el voto particular que formulé en la contradicción de tesis 89/2020, fallada en sesión de 10 de febrero de 2021 por esta Primera Sala. Asunto que se encuentra estrechamente vinculado con este que nos ocupa.
13. En ese sentido, como lo adelanté, la improcedencia del juicio de amparo deriva de la propia naturaleza del acto reclamado, consistente en la resolución del juez de control en la cual determina revocar la decisión del no ejercicio de la acción penal emitida por el Ministerio Público y ordena la reapertura de la investigación. Considero que dicho acto **no causa en la esfera jurídica del quejoso un daño de imposible reparación que afecte materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal, tal como lo exige el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, que ameriten la procedencia del juicio de amparo.**

⁷ **Artículo 61.** El juicio de amparo es improcedente [...]

XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;

⁸ **Artículo 5o.** Son partes en el juicio de amparo:

I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico.

El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo.

El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa;

La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley.

14. En efecto, el hecho de que se revoque un acuerdo de no ejercicio y se ordene por parte del juez de control se aperture una investigación, no ocasiona agravio irreparable en contra de la persona investigada que conlleve una vulneración a un derecho sustantivo. Esa orden solo implica que se llevarán a cabo las investigaciones correspondientes –a las cuales la fiscalía se encuentra obligada– en aras de determinar el ejercicio o no, por parte del Estado, de la acción penal contra una persona por estimar que intervino en la comisión de algún hecho considerado como delictivo, en términos del artículo 21 constitucional.
15. Circunstancia la anterior que, al ser una cuestión de orden público, pues da origen a que se inicie la investigación para determinar la posible existencia de un delito y la probable intervención de una persona en su comisión, no puede considerarse procedente el juicio de amparo indirecto, pues no puede estar el interés personal por encima del público. Además, tal acto podría culminar nuevamente en el no ejercicio de la acción penal, e incluso, resolverse que la persona investigada debe ser otra, no el propio quejoso.
16. De hecho, en el supuesto de resolverse el ejercicio de la acción penal, tampoco el acto en sí mismo ocasiona perjuicio al quejoso –al respecto existe amplia doctrina constitucional desarrollada por la Suprema Corte–. Puede acontecer que el juez de control correspondiente determine negar la solicitud del fiscal de conducir al proceso penal al quejoso, a través de un citatorio u orden de comparecencia o aprehensión, según corresponda.
17. Incluso, de librarse una orden de aprehensión, será hasta entonces cuando el quejoso se encuentre en aptitud de promover el juicio de amparo indirecto. Es, hasta ese momento, cuando el acto reclamado

afecta materialmente alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución General, en el caso, su libertad y por ende, nace el interés jurídico para acudir al juicio de amparo.

18. Sostener la procedencia del juicio de amparo, sería tanto como aceptar que contra las indagatorias iniciadas por el fiscal en cumplimiento a la obligación constitucional prevista en el artículo 21 de la Constitución General procede el juicio de amparo indirecto, cuestión que no es así, tal como lo ha sostenido este Alto Tribunal en diversos criterios, al ser una cuestión de orden público cuya función corresponde al fiscal y, en sí mismo, no es un acto de imposible reparación.
19. Me parece que el acto reclamado en mención no materializa un interés jurídico por sí mismo para instar el juicio, menos aún que se trate de injerencias en la vida privada. Debe tenerse presente que la investigación que realice el ministerio público es la que determinará si existen o no elementos para judicializar una carpeta de investigación en contra de determinada persona.
20. En efecto, la posibilidad de que el Estado lleve a cabo la investigación de un hecho delictivo en contra de una persona, bajo su facultad de investigación y en pro de una colectividad que busca conocer la verdad de los hechos denunciados, no interfiere en la vida privada de la persona que es investigada, y menos aún puede tomarse como una injerencia arbitraria, pues dicha investigación se hace bajo las modalidades y procedimientos establecidos en la ley.
21. Es por ello, que el acto reclamado que versa sobre la revocación de una determinación del ministerio público de no ejercicio de acción penal y ordenar que se siga una investigación, actualiza la citada causa de

improcedencia que tiene como resultado sobreseer en el juicio de amparo indirecto.

22. Las razones anteriores, son las que motivaron mi voto en contra de la decisión adoptada en la sentencia mayoritaria.

Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá

Mtro. Raúl Mendiola Pizaña
Secretario de Acuerdos de la Primera Sala

RRM/edb